

En qué gasta el dinero la Unión Europea y quiénes lo deciden.

Joaquín Olona Blasco. Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco.

Javier Lorén Zaragoza. Presidente del Consejo General de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España.

El pasado 22 de julio la Comisión Europea publicó el Informe sobre el gasto realizado durante 2013, que ascendió a 134.656,1 millones €. El 49,90 % correspondió al “Crecimiento sostenible”, que es la rúbrica donde actúan el FEDER, el Fondo Social Europeo o el Fondo de Cohesión; otro 42,25 % se aplicó a la política agrícola, dentro del apartado “Conservación y gestión de los recursos naturales”; los gastos de administración justificaron un 5,64% del total y el 2,21 % restante se destinó a medio ambiente, pesca, ciudadanía, libertad, seguridad, justicia y acción exterior. España fue el tercer país, tras Polonia y Francia, que más fondos recibió en 2013 (13.752,2 millones €) siendo superada tan sólo por Francia en la recepción de fondos agrícolas.

La UE, que algunos definen como “Objeto Político No Identificado”, es un complejo laberinto de instituciones e intereses donde nuestros legítimos representantes, los eurodiputados, carecen del peso deseable en una democracia avanzada. El resultado final es que no sabemos muy bien qué intereses determinan realmente las decisiones que benevolentemente atribuimos a Europa.

Así, por ejemplo, Europa ha decidido centrar su estrategia agrícola en la “Conservación y gestión de los recursos naturales”. Esto tiene mucho que ver con seguir aplicando más del 90% de la ayuda agrícola a la compensación directa de la renta de los agricultores, a cambio del cumplimiento de ciertas exigencias ambientales pero sin importar la productividad de su trabajo ni la competitividad de sus productos. Algo no necesariamente ajeno al hecho de que la UE haya desbancado en 2013 a Estados Unidos en el liderazgo mundial de las exportaciones agroalimentarias. Cobrar por producir de forma ineficiente no es lo que necesita un sistema agroalimentario que, como el español, resulta clave para la recuperación del crecimiento puesto que representa el 8,4% del PIB nacional, genera más de 2,3 millones de empleos y, aportando el 16,2% de las ventas exteriores, lidera las exportaciones (MAGRAMA, 2014).

En toda política pública, el reparto de cargos y posicionamiento de actores es un objetivo siempre presente, aunque nunca explicitado. Durante las pasadas elecciones europeas se habló de todo menos de Europa. Poco importó lo que los candidatos prometieran hacer allí, de hecho, ninguno lo explicó. Tampoco parece que piensen explicar mucho tras su elección.

También fue el pasado 22 de julio cuando los estados y las regiones enviaron a la Comisión Europea sus Programas de Desarrollo Rural 2014-2020. Habiéndose exigido participación de los agentes en su formulación, su aprobación depende ahora del criterio exclusivo de la burocracia comunitaria.

Nos conviene que todo esto cambie. Porque el presupuesto europeo, al cofinanciar la mayor parte de las políticas nacionales y regionales, las condiciona completamente. En eso radica precisamente la lógica europea.